



Bogotá, D.C., veinte (20) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

**REFERENCIA:**

**EXPEDIENTE:** 11001 33 35 010 2017 00350 00  
**ACCIONANTE:** YOHN JAIRO GÓMEZ DEL RIO  
**ACCIONADO:** NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL –  
EJÉRCITO NACIONAL  
**CLASE:** NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

El Despacho procede a determinar si en el caso de estudio hay lugar a prescindir de las audiencias y proferir sentencia anticipada.

Para decidir se **CONSIDERA:**

En primer lugar, el artículo 182A del CPACA faculta al Juez para proferir sentencia anticipada, sin necesidad de celebrar audiencia inicial y audiencia de pruebas. Las condiciones para prescindir de la respectivas audiencias se enuncian así: (i) cuando el asunto sea de puro derecho; (ii) cuando no haya que practicar pruebas, (iii) cuando solo se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y la contestación, y sobre ellas no se hubiese formulado tacha o desconocimiento, y, (iv) cuando las pruebas solicitadas por las partes sean impertinentes, inconducentes o inútiles. Por manera que los presupuestos para prescindir o no de la audiencia inicial, se contraen a evaluar los requerimientos probatorios para definir el asunto.

No obstante, el artículo 180 (Num. 6º) del CPACA, modificado por el artículo 40 de la Ley 2080 de 2021, determinó que en el auto que se pronuncie sobre las pruebas se decidirán las excepciones pendientes de resolver y la fijación del litigio. Al armonizar esta norma con la citada en el párrafo anterior - artículo 182A del CPACA – resulta válido afirmar que al momento de revisar las aludidas condiciones para prescindir de la celebración de las respectivas audiencias, se pueden decidir las excepciones previas y la fijación del litigio.

Ello se explica en que el artículo 180 del CPACA estableció que previo a pronunciarse sobre las pruebas se deben decidir las excepciones previas y fijar el litigio. La secuencia de las decisiones obedece a que en caso de prosperar alguna excepción previa, resultaría inoficioso tratar el tema probatorio. Igualmente, al revisar la fijación litigio se adquiere el criterio suficiente para determinar la pertinencia, conducencia y utilidad de las pruebas que soliciten las partes. Siendo así, el Despacho primero asumirá el estudio de las excepciones previas y de la fijación del litigio, antes abordar los aspectos probatorios a los que alude el artículo 182A del CPACA.

En todo caso, el artículo 182A permite que si hay lugar a decretar pruebas, se emita el pronunciamiento mediante auto conforme a lo dispuesto en el artículo 173 del Código General del Proceso.

## **1. EXCEPCIONES**

Con la contestación de la demanda se propusieron tres (3) excepciones, todas bajo el rotulo de “inepta demanda”. A esta expresión, le siguieron los motivos de ineptitud de la demanda, que se expresaron en las siguientes términos: por (i) “no haberse



agotado el requisito de procedibilidad a la pretensión de indemnización como reparación de perjuicios causados”; (ii) “por no señalar, argumentar ni probar alguna afecte la legalidad del acto administrativo demandado”; y (iii) “por no haberse agotado el procedimiento administrativo conducente para definir la situación médica laboral”; y por “ausencia de los requisitos para obtener el reconocimiento de la pensión de invalidez”.

El Despacho considera que no todos los motivos por los cuales se formula excepción de inepta de demanda, constituyen excepción previa, pues algunos se refieren a cuestiones de fondo. Los únicos motivos de la inepta demanda que se ajustan a la figura jurídica de la excepción previa son aquellos que cuestionan los requisitos de la demanda, los cuales se contraen a las siguientes: (i) por la falta de agotamiento del requisito de procedibilidad frente a la indemnización, y (ii) por indebido agotamiento de la actuación administrativa. Los demás motivos por los cuales se planteó la excepción de inepta demanda se estudiarán al proferir la sentencia, porque atacan el derecho reclamado. El Despacho procederá a pronunciarse sobre los motivos que hacen que la excepción de inepta demanda sea considerada como previa. Vale anotar que la parte actora no recorrió el traslado de las excepciones.

#### **1.1 Inepta demanda por falta de agotamiento del requisito de procedibilidad.**

Textualmente, esta excepción se propone por “no haberse agotado el requisito de procedibilidad a la pretensión de indemnización como reparación de perjuicios causados”. Al sustentar la excepción argumentó que se pretenden aspectos pecuniarios como la indemnización, la reparación de perjuicios y la indexación. Tales pedimentos no versan sobre derechos ciertos e indiscutibles, circunstancia por la cual considera que se debió agotar el requisitos de procedibilidad, en alusión al trámite conciliatorio ante del Ministerio Público previo a acudir a la Jurisdicción.

Para despachar la citada excepción es forzoso partir del contenido de las pretensiones de la demanda. El actor persigue que se declare la nulidad del acto presunto que negó la pensión por invalidez y el reajuste de la indemnización consecuente. A título de restablecimiento del derecho solicita el reconocimiento de la pensión por invalidez y la indemnización por razón de la discapacidad. Igualmente, se solicita 100 salarios mínimos legales por concepto de reparación de los perjuicios causados. Las pretensiones se refieren tres cuestiones distintas, a saber: la pensión de invalidez, la indemnización por disminución de la capacidad psicofísica, y los perjuicios por el daño de las lesiones causadas.

Vista las pretensiones se evaluará si se requería agotar el aludido requisito de procedibilidad. De acuerdo con el artículo 161 (Num. 1<sup>o</sup>) del CPACA, tal requisito sólo se predica de los asuntos que son conciliables. Si bien es cierto, el actor reclama indemnización por discapacidad y perjuicios por el daño, no se puede pasar en alto que también se pretende el reconocimiento de la pensión por invalidez. Dado que reiteradamente la jurisprudencia ha señala que las controversias pensionales no son conciliables, igual suerte debe correr las demás pretensiones de la demanda. Por tal motivo, el Despacho considera que no prospera la excepción en estudio.

#### **1.2. Ineptitud de la demanda por el indebido agotamiento de la actuación administrativa.** Textualmente, el actor denominó la excepción como *“inepta demanda por no haberse agotado el procedimiento administrativo conducente para*

---

<sup>1</sup> “Cuando los asuntos sean conciliables, el trámite de la conciliación extrajudicial constituirá requisito de procedibilidad de toda demanda en que se formulen pretensiones relativas a nulidad con restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales.”.



*definir la situación médica laboral*”. Con esta expresión quiso decir que el accionante omitió realizar el procedimiento previsto en el Decreto 1796 de 2000, esto es, solicitar la convocatoria de la Junta Médico Laboral del Ejército Nacional. Explicó que el trámite comienza con la diligenciamiento de la ficha de retiro o licenciamiento, calificación de la ficha, la consecución de los conceptos médicos definitivos, y luego sigue la convocatoria de la Junta Médico Laboral

Para despachar esta excepción, se observa el artículo 19 del Decreto de 1796 de 2000 determinó que la Junta Médico-Laboral Militar para “Clasificar el tipo de incapacidad sicológica y aptitud para el servicio” se puede convocar a “solicitud del afectado”. Este caso, el demandante demostró que elevó la petición con el fin de que le practicaran los exámenes médicos de especialistas y le reconociera la pensión por invalidez, frente a la cual la administración guardó silencio. Si bien es cierto, la petición no se dirige a solicitar la convocatoria de la Junta Médico Laboral, el silencio de la administración hizo entender al usuario que no se realizaría tal trámite, y por consiguiente, el administrado sólo tenía como alternativa acudir ante la jurisdicción. En efecto, el artículo 18 del Decreto 1796 de 2000 dispone que la Junta Médico Laboral se puede convocar por orden judicial. Por ello, se considera que no prospera la excepción previa en estudio.

## 2. FIJACIÓN DEL LITIGIO.

Yohn Jairo Gómez del Rio con cédula de ciudadanía 1.014.208.970 expedida en Bogotá, pretende la nulidad del acto ficto presunto que negó la pensión de invalidez y la indemnización. A título de restablecimiento del derecho, solicita la pensión de invalidez, la indemnización más el pago de los perjuicios por el daño de las lesiones causadas. La Administración se opuso en razón a que no reúne los requisitos para acceder a la pensión de invalidez, y no se siguió el conducto de la valoración de la Junta Médica Laboral. Las posturas de las partes permiten fijar el litigio en los siguientes términos:

Establecer si el demandante tiene derecho al reconocimiento de la pensión de invalidez, la indemnización y los perjuicios de acuerdo a la pérdida de la capacidad sicológica

## 3. PRUEBAS.

**3.1 Pruebas aportadas.** Únicamente la parte actora aportó con la presentación de la demanda. El Despacho decretará e incorporará al expediente las pruebas aportadas por el libelista, con excepción de la *“Copia del informe técnico realizado a mi poderdante por el Dr. ENRIQUE AYALA PÉREZ, Médico Cirujano, Especialista en Salud Ocupacional y Administración de Salud y Seguridad Social, Consultor en peritajes Médicos Laborales y Administrativos, acompañado de la documentación que acreditan la idoneidad de profesional”*. Esta prueba no se decretará e incorporará al expediente por inconducente e inútil, por las razones que se expondrán a continuación:

La decisión tiene como punto de partida la identificación del tipo de prueba que aportada con la demanda y que se niega con este proveído. Si bien es cierto, las partes están facultadas para utilizar cualquier medio de prueba, el artículo 165 del CGP dispone *“El juez practicará las pruebas no previstas en este código de acuerdo con las disposiciones que regulen medios semejantes en materia probatoria”*. La prueba aportada en estudio, la identifica el actor como *“informe técnico”*, empero, el Despacho considera que no reúne las características legales de la *“prueba por*



informe” del capítulo X, del título único de la sección tercera del libro primero del Código General del Proceso.

En efecto, el artículo 275 del CGP dispone que los informes públicos o privados deben versar sobre “*sobre hechos, actuaciones, cifras o demás datos que resulten de los archivos o registros de quien rinde el informe*”. En este caso, es evidente que el informe técnico aportado con la demanda no corresponde a información que se extraiga de algún archivo o registro público o privado, pues se trata de una valoración médica de la capacidad sicofísica del demandante, realizada por un especialista con criterios científicos, que utiliza conceptos, instrumentos y técnicas propias de los dictámenes de medicina laboral.

Por ello, el Despacho considera que aludido informe técnico se ajusta a las características de la “prueba pericial” del capítulo VI del título único de la sección tercera del libro primero del Código General del Proceso. Al respecto, el artículo 226 del CGP dispone que la prueba pericial es “*para verificar hechos que interesen al proceso y requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos*”. Así se concluye que la prueba aportada con la demanda identificada como “informe técnico” será despachada conforme a la normativa que regula la prueba pericial.

Precisado el tipo de prueba anexada a la demanda, se procederá a sustentar porque se considera inconducente e inútil. La razón estriba en que el legislador no permite que cualquier perito o técnico dictamine sobre el estado de la pérdida de capacidad laboral y el estado de invalidez. El artículo 41 de la Ley 100 de 1993 determinó que corresponde a la administradora de la pensión o la EPS expedir el respectivo dictamen. Ante la inconformidad del evaluado, dictamina la Junta Regional de Calificación de Invalidez, y en segunda instancia la Junta Nacional de Calificación de Invalidez.

En el caso de los miembros de la Fuerza Pública que presentan pérdida de capacidad laboral o algún estado de invalidez, le corresponde evaluarlo a las autoridades médico-laborales en el siguiente orden: (i) los médicos generales y médicos especialistas de la planta asignados a Medicina Laboral de las Direcciones de Sanidad de las Fuerzas Militares, (ii) los integrantes de las Juntas Médico-Laborales; y (iii) los integrantes del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, según el artículo 14 (numeral 2º) del Decreto 1796 de 2000.

Se sigue de lo anterior, que el dictamen aportado y denominado “*Copia del informe técnico realizado a mi poderdante por el Dr. ENRIQUE AYALA PÉREZ, Médico Cirujano, Especialista en Salud Ocupacional y Administración de Salud y Seguridad Social, Consultor en peritajes Médicos Laborales y Administrativos, acompañado de la documentación que acreditan la idoneidad de profesional*”, deviene en improcedente, y por ende, debe ser rechazada, como se decidirá al final de esta providencia.

### 3.2 Pruebas solicitadas.

El libelista solicitó las siguientes pruebas: (i) antecedentes de las lesiones y afecciones para la calificación de la disminución de la capacidad laboral; (ii) información de las afecciones padecidas en desarrollo de las actividades desarrolladas durante la trayectoria profesional; (iii) la disposición administrativa de licenciamiento; y (iv) el acta de la Junta Médico Laboral que le haya sido practicada,



o en su defecto, se ordene la convocatoria de la Junta Médico Laboral que definió su situación médico laboral.

El Despacho observa que obran en el informativo de lesiones y la orden administrativa de licenciamiento, los que ya se decretaron e incorporaron al expediente, con lo cual se estima satisfecha la solicitud de pruebas.

El Despacho sólo decretará y ordenará el acta de la Junta Médico Laboral que se hubiese practicado al actor. En caso de que la entidad oficiada manifieste que no existen actas que dictaminaron sobre la pérdida de capacidad laboral, se decidirá sobre convocatoria de la Junta Médica Laboral con tal fin.

En igual sentido, el apoderado del Ejército Nacional solicitó oficiar a la Coordinadora de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa Nacional para que informe si el actor le solicitó la pensión de invalidez o indemnización, con los respectivos documentos, e informe los requisitos exigidos a los soldados regulares. El Despacho procederá concederá esta prueba en razón a que el actor tiene la condición de soldado regular.

De oficio, decretará como prueba oficiar al Director de Personal del Ejército Nacional para que informen si el actor recibió alguna indemnización debido al informativo de lesiones 043643 de 11 de febrero de 2013 por hechos sucedidos en San Juan de Arana Meta Bicon No 51 de 12 de diciembre de 2012.

#### 4. AUDIENCIAS.

Es claro que están reunidas las condiciones para prescindir de la audiencia de inicial prevista en el artículo 180 del CPACA. Sobre la audiencia de pruebas se decidirá una vez allegado al expediente la documental solicitada.

Por lo expuesto, el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá,

#### DISPONE

**PRIMERO. DECLARAR** que infundadas las excepciones previas de ineptitud de la demanda por la falta de agotamiento del requisito de procedibilidad frente a la indemnización, y por indebido agotamiento de la actuación administrativa, por las razones antes expuestas.

**SEGUNDO. FIJAR EL LITIGIO** en los siguientes términos: tiene derecho al reconocimiento de la pensión de invalidez, la indemnización y los perjuicios de acuerdo a la pérdida de la capacidad sico-física.

**TERCERO. DECRETAR E INCORPORAR** al expediente, con el valor legal que les corresponda, todos y cada uno de los medios de pruebas aportados con la demanda y aquellas solicitadas que se allegaron al expediente de acuerdo a lo arriba expresado.

**CUARTO. RECHAZAR** la prueba aportada con la demanda y denominada “*Copia del informe técnico realizado a mi poderdante por el Dr. ENRIQUE AYALA PÉREZ, Médico Cirujano, Especialista en Salud Ocupacional y Administración de Salud y Seguridad Social, Consultor en peritajes Médicos Laborales y Administrativos, acompañado de la documentación que acreditan la idoneidad de profesional*”, por improcedente, inconducente e inútil, conforme a lo expuesto en esta providencia.



REPUBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
JUZGADO DECIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ  
Sección Segunda

Expediente: 11001-33-35-010-2017-00350-00

**QUINTO. DECRETAR** las siguientes pruebas:

(i) Oficiar al Coordinador o Jefe de Medicina Laboral de la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional para que manifieste si existe acta de la Junta Médico Laboral practicada al SLR Yohn Jairo Gómez del Rio con cédula de ciudadanía 1.014.208.970 expedida en Bogotá, con ocasión informativo de lesiones 043643 de 11 de febrero de 2013 por hechos sucedidos en San Juan de Arana Meta Bicon No 51 de 12 de diciembre de 2012. En caso de que la entidad oficiada manifieste que no existen actas que dictaminaran sobre la pérdida de capacidad laboral, se decidirá sobre convocatoria de la Junta Médica Laboral con tal fin. La carga de la prueba la tiene la parte actora por ser quien la solicitó

(ii) Oficiar al Coordinador de Prestaciones Sociales de la Secretaría General del Ministerio de Defensa Nacional para que informe si el SLR Yohn Jairo Gómez del Rio con cédula de ciudadanía 1.014.208.970 expedida en Bogotá realizó ante esa entidad trámites para la pensión de invalidez y la indemnización, por razón del informe administrativo informativo de lesiones 043643 de 11 de febrero de 2013 por hechos sucedidos en San Juan de Arana Meta Bicon No 51 de 12 de diciembre de 2012, y adicionalmente indique los requisitos exigidos para el efecto. En caso afirmativo, remita a este Juzgado los documentos del trámite y actos administrativos expedidos. La carga de la prueba la tiene la accionada por ser quien solicitó la prueba.

(iii) Oficiar al Director de Personal del Ejército para que informe si el SLR Yohn Jairo Gómez del Rio con cédula de ciudadanía 1.014.208.970 expedida en Bogotá realizó ante esa entidad trámites para recibir la indemnización, por razón del informe administrativo informativo de lesiones 043643 de 11 de febrero de 2013 por hechos sucedidos en San Juan de Arana Meta Bicon No 51 de 12 de diciembre de 2012. La carga de la prueba la tiene la parte actora por ser quien solicita la indemnización.

**SEXTO. PRESCINDIR** de la audiencia inicial establecida en la ley para tramitar el proceso, conforme a lo dispuesto en el artículo 182A del CPACA.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

**LUZ ADRIANA MÉNDEZ MARTÍNEZ**  
**JUEZ**

gpg

Firmado Por:

**LUZ ADRIANA MENDEZ MARTINEZ**  
**JUEZ**

**JUZGADO 010 ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C.-SANTAFE DE BOGOTA D.C.,**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **ae24eb1d5af272c69b41a41e26acb1f5329c34f473530220fb97f59d4e264a5c**  
Documento generado en 20/05/2021 10:07:42 AM

Valide este documento electrónico en la siguiente URL:  
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>